

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por GLORIA ESTELLA URIBE ZAPATA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- y la ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCIÓN S.A. (Radicado 05001-31-05-006-2018-00785-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante, previa declaración de ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual, se ordene regresarla de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION S. A., a COLPENSIONES. En consecuencia, se condene a PROTECCION S.A. a trasladar todos los dineros de la cuenta de la cuenta de ahorro pensional, los rendimientos, los bonos pensionales, etc, sin descuento alguno, a Colpensiones; a esta entidad a recibirlos y a tenerla como su afiliada sin solución de continuidad; por último, a que se condene en costas a Protección S.A. (fl. 5).

Como sustento de sus pretensiones manifiesta sucintamente lo siguiente:

Siendo afiliada al ISS, hoy Colpensiones, entidad para la cual cotizó entre el mes de julio de 1982 y el mes de noviembre de 1996, se trasladó al RAIS, administradora Protección S.A., conforme a solicitud que diligenció el 6 de noviembre de 1996; para este acto de cambio de régimen no recibió por parte del asesor una información veraz, completa y suficiente, ni mucho menos datos de las ventajas y desventajas de los regímenes de pensiones; solicitó a Colpensiones y a Protección S.A. el traslado al RPM, pero le fue negado por encontrarse a menos de 10 años para la pensión de vejez o por haber recibido la información debida (fls. 1 a 4).

Colpensiones como entidad demandada dio respuesta oportuna al escrito inicial. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones, bajo el argumento que las formuladas carecen de fundamentación fáctica, legal y probatoria; aceptó los hechos relativos al nacimiento de la demandante, a la afiliación, al traslado y a la reclamación que le hizo. De los demás afirmó que no le constaban por ser hechos ajenos relativos a terceros, los cuales deberán ser probados por la accionante. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la ineficacia de la afiliación al RAIS, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas (fls. 119 y ss).

Protección S.A. también presentó respuesta oportuna al libelo introductorio. Exponiendo razones de hecho y de derecho, se opuso a la prosperidad de las pretensiones. De los hechos aceptó la fecha de nacimiento de la demandante, la afiliación inicial al ISS hoy Colpensiones y el traslado de régimen. De los restantes manifestó que no le constaban o que no eran ciertos. Como excepciones de mérito propuso entre otras las de inexistencia de la obligación, falta de causa para pedir, buena fe y prescripción, entre otras (fls. 107 y ss).

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 31 de agosto de 2020, dispuso:

Primero. No se accede a la declaración de ineficacia de la afiliación a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. y con ello el traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, realizado por la señora Gloria Estella Uribe Zapata, identificada con la cedula de ciudadanía 43.067.544, el día 06 de noviembre del 1996. Segundo. Se declara que la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. incumplió gravemente sus obligaciones de información profesional, suficiente, clara, veraz y oportuna a la señora Gloria Estella Uribe Zapata, impuestas en los artículos 10 y 12 de Decreto 720 de 1994, artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y Circular 001 de 2004 impartida por la Superintendencia Financiera. Tercero. En consecuencia, de conformidad con los artículos 4 y 21 del Decreto 656 de 1994 la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. es responsable con cargo a sus propios recursos por el perjuicio causado al derecho pensional de la señora Gloria Estella Uribe Zapata con la pérdida de la oportunidad de acceder a la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Cuarto. La señora Gloria Estella Uribe Zapata una vez en firme esta sentencia podrá reclamar a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. el reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme a lo establecido en los artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 y demás condiciones establecidas en dicha Ley, modificada por la Ley 797 de 2003. Quinto. Se absuelve a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones de las pretensiones formuladas en su contra por la señora Gloria Estella Uribe Zapata Sexto. Las excepciones propuestas contra la demanda quedan implícitamente resueltas con las consideraciones para este proveído. Séptimo. Las costas del proceso las pagará la AFP Protección S.A. a la señora Gloria Estella Uribe Zapata. Se liquidarán por Secretaría una vez en firme la sentencia; como agencias en derecho se fija la suma de \$3.000.000,00

Inconforme con la decisión, interpusieron recurso de apelación los apoderados de la demandante y de Protección S.A.

El de la demandante, pretende en últimas con su recurso, que se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se falle conforme a lo pedido. No comparte la conclusión que sea Protección S.A. quien deba cancelar la pensión de vejez en los términos en que se hizo, pero si está de acuerdo en que hubo carencia de información por parte de la AFP. Cuestiona además, con fundamento en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, la documentación relativa a la reasesoría pensional.

Y la de Protección S.A., en esencia aspira que se revoque en su integridad el fallo dictado. Empieza por decir que la entidad sí cumplió con el deber de información, de conformidad con las exigencias que para la época existían, tal como se desprende del interrogatorio de parte que absolvió la demandante, motivo por el cual no debe reconocerse la ineficacia pedida. Hace énfasis en que esta AFP no tiene porqué reconocer la pensión de vejez a la demandante, no solamente porque así no se pidió, sino porque las normas de la ley 100 de 1993 excluyen tal posibilidad. Para este efecto refiere los principios de congruencia y sostenibilidad financiera del sistema. Afirma que cuando se vulnera el mandato establecido en el artículo 271 de la anterior ley, la consecuencia es que las cosas vuelvan al estado anterior. Finaliza diciendo que a la demandante no se le generó perjuicio alguno, porque conserva la posibilidad de pensionarse, a más de que no lo probó.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por los apoderados de la demandante y Protección S.A., conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001.

Lo primero que debe decir esta Colegiatura, es que ningún reproche hará a los términos utilizados en contra del régimen de ahorro individual y a sus administradoras por parte de la juez de primer grado, no porque en verdad no puedan calificarse como inapropiados, sino porque jurídicamente no forman parte de la materia a decidir. En las providencias judiciales se le resta majestad

a la función cuando el análisis y decisión de las distintas controversias se realiza con criterios políticos o ideológicos. Bien dice el artículo 230 de la Constitución Nacional: *“Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”*.

Ahora bien, fuera de toda discusión, por existir plena prueba de ello, está que la demandante nació el 12 de julio de 1961 (fl. 16); que se afilió al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, en el mes de julio de 1982 y permaneció allí hasta el mes de noviembre de 1996 (fl. 150); que estando afiliada a esta AFP se trasladó al RAIS el 6 de noviembre de 1996, concretamente a la AFP PROTECCIÓN S.A. (fl. 87), en la que actualmente se encuentra afiliada (fls. 17 y ss.); y que el 7 de julio de 2008 recibió una reasesoría pensional (fl. 91).

El punto básico para esclarecer en esta instancia, acorde con el alcance dado a los recursos de apelación oportunamente propuestos, es el relativo a determinar si el traslado de la demandante del RPMPD al RAIS fue o no ajustado a la ley, y en caso de que no lo hubiere sido, analizar si hay lugar o no a la devolución de aportes, rendimientos y demás ítems. Esto implica establecer, entre otros asuntos, si la voluntad de la accionante al momento de trasladarse del RPMPD al RAIS estuvo afectada por un vicio en el consentimiento o conducta antijurídica.

Para estos fines, y dado el poder vinculante de la jurisprudencia de las altas cortes, entre ellas la de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por el mandato de los artículos 86 del CPTSS y 333 del CGP, que consagran como uno de los fines del recurso de casación el de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, la Sala estima del caso hacer referencia textual a algunos apartes de la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el 8 de mayo de 2019 (SL1688-2019, Rad. 68838), la cual compendia para el día de hoy, con total claridad y precisión, el estado de la materia en asuntos de ineficacia de

traslados de régimen pensional por falta de una adecuada información, las consecuencias de la declaración dada por los afiliados en los documentos de traslado de régimen, la carga de la prueba, y los alcances de la ineficacia y las reasesorías que se realizan con posterioridad al traslado inicial, entre otros. Y para lo anterior, cabe recordar el criterio expresado por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 440 de 2021:

“Ahora, es cierto que los jueces del trabajo deben considerar en sus sentencias el precedente judicial vertical que emana de la Sala de Casación Laboral. En efecto, al ser esta el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, sus decisiones tienen fuerza vinculante en virtud de los principios de igualdad, buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, pero siempre que tengan la capacidad de responder adecuadamente a la realidad fáctica del asunto concreto, así como la social, económica y política del momento (CC C-836-01 y CC -621-2015).

En este sentido, de existir un precedente aplicable, los jueces laborales deben identificarlo -carga de transparencia- y, hecho esto, acatarlo o disentir del mismo. Si es lo segundo, asumen la obligación de desplegar una carga argumentativa suficiente que explique las razones del disenso -requisito de suficiencia-, bien por: (i) ausencia de identidad fáctica, que impide aplicar el precedente al caso concreto, (ii) cambios normativos, (iii) transformaciones sociales que obligan a dar una nueva mirada a determinada cuestión, dado que los jueces deben adaptarse a las exigencias que impone la realidad y reconocer la evolución del derecho (CC T-446-2013), o (iv) divergencias hermenéuticas fundadas en la prevalencia de mejores y más sólidos argumentos que permiten un desarrollo más amplio de los derechos, libertades y garantías constitucionales (CC C-621-2015).

Y en el presente caso, a más de que los criterios jurisprudenciales que se transcribirán se ajustan debidamente a la controversia, se tiene que la a quo en su argumentación no expone razones sólidas que mejoren la posición pacífica y reiterada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia.

Aclarado lo anterior, es del caso recordar que en la sentencia SL1688 antes referida, sobre el deber de información, quedó dicho:

“El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales Y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición V la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3.º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto Con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

1.4 Conclusión: La constatación del deber de información es ineludible

Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de

acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.

Así las cosas, el Tribunal cometió un primer error al concluir que la responsabilidad por el incumplimiento o entrega de información deficitaria surgió con el Decreto 019 de 2012, en la medida que este exista desde la expedición de la Ley 100 de 1993, el Decreto 663 de 1993 y era predicable de la esencia de las actividades desarrolladas por las administradoras de fondos de pensiones, según se explicó ampliamente.

Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto la indebida fundamentación con la que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Medellín emitió su sentencia, pues sin razón alguna se limitó a señalar que a partir del Decreto 019 de 2012 es imputable responsabilidad por omisión o cumplimiento deficitario del deber de información a las AFP, sin especificar la norma de ese decreto que le daba sustento a su dicho y sin la construcción de un argumento jurídico que soportara su tesis. Es decir, la sentencia estuvo desprovista de una adecuada investigación normativa y un discurso jurídico debidamente fundamentado.

En cuanto a las consecuencias de las constancias que se registran en los formularios de afiliación o traslado, se dijo:

“2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente. Necesidad de un consentimiento informado

Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.

La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre U voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.

Sobre el particular, en la sentencia CSJ Sl. 19447-2017 la Sala explicó:

Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario[...].

De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.

Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ Sl. 19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.

Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal cometió un segundo error jurídico al sostener que el acto jurídico de traslado es válido con la simple anotación o aseveración de que se hizo de manera libre y voluntaria y, por esa vía, descartar la necesidad de un consentimiento informado.

En materia de carga de la prueba del deber de información, anotó:

“En consecuencia, si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo.

Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.

Por último, en cuanto al alcance de la ausencia del deber de información y de los nulos efectos que pueden generar las reasesorías posteriores, quedó dicho:

“Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto.

...

Ahora, si bien la AFP brindó a la actora una reasesoría el 26 de noviembre de 2003, en virtud de la cual se concluyó la inconveniencia de continuar en Protección S.A., la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones:

En primer término, porque el traslado al RAIS implicó la pérdida de los beneficios derivados de la transición al no contar la demandante con 15 años de cotización o servicios a 1.º de abril de 1994. Es decir, así se hubiese trasladado la demandante al día siguiente de la reasesoría, de todas formas ya había perdido la transición.

En segundo lugar, porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información.

Por otro lado, no es de recibo el planteo de Protección S.A., cuando sostiene que una vez realizó la reasesoría, Myriam Arroyave Henao no mostró interés en la ineficacia de la vinculación al RAIS, al conservar su status de afiliada durante un tiempo, Se dice lo anterior ya que la sugerencia de Protección S.A. de regresar al RPMPD, se produjo el 26 de noviembre de 2003, y el formulario para la nueva afiliación al ISS se diligenció el 14 de enero de 2004 (f. 0 97), es decir, la interesada no dejó transcurrir dos meses desde que recibió asesoría. Por lo demás, este lapso es razonable, pues dada la relevancia de esta determinación, era natural que la accionante se tomara un tiempo de reflexión, buscara información y consejo profesional para, finalmente, adoptar su elección.

Con sustento en estos presupuestos, y sin necesidad de hacer referencia al principio de la congruencia, el cual manifiestamente vulneró la juez de primer grado, pues tomó la decisión sin haberse planteado sus supuestos, entre ellos el de si la pensión de vejez podía o no estar en cabeza de la administradora, así sea a título de perjuicios, esta Colegiatura es el criterio que la ineficacia solicitada en la demanda debe reconocerse, pues basta la mera ausencia de información al afiliado, clara, precisa y completa, para que se produzca la irregularidad del acto de cambio de régimen pensional, situación que fue exactamente la que ocurrió en el presente caso; a la Sala no le queda la menor duda que la demandada, en este caso, Protección S. A., al no haber arrimado al proceso prueba idónea y completa de la información que se le debió de haber brindado a la señora Gloria Estella Uribe Zapata en el traslado que ésta realizó en noviembre de 1996, y no inferirse ésta del interrogatorio de parte que se le formuló, la consecuencia no puede ser otra diferente a la de declarar ineficaz tal acto y, por tanto, tener como vinculación válida la que tenía con el Régimen de Prima Media con Prestación definida. Sobra anotar que el registro de “VOLUNTAD DE SELECCIÓN Y AFILIACIÓN” que da cuenta el documento

obrante a folios 87, carece de valor probatorio por las razones que quedaron expuestas en la decisión judicial inicialmente transcrita. También se debe hacer mención a la reasesoría que refiere el documento obrante a folios 91, y a la cual el recurrente dedica una buena parte de su sustentación, pues como también quedó dicho en precedencia, la ineficacia que se reconoce apunta a los momentos del traslado inicial, y no al comportamiento asumido por la AFP en el transcurso de la vinculación del afiliado.

Esto que se dice conlleva entonces, acorde con la doctrina jurisprudencial antes referida, a que las partes deben ser restituidas al estado anterior (art. 1746 del CCC), esto es, que la afiliación del demandante con el ISS, hoy Colpensiones, no solo nunca sufrió alteración alguna, sino que la entidad demandada que actualmente maneja la cuenta de ahorro individual del demandante, esto es, Protección S.A., deberá devolver a la administradora del RPMPD todas las cotizaciones a la primera, incluyendo sus rendimientos, gastos de administración, y las sumas de dinero que retiene o haya retenido para los seguros previsionales y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y Colpensiones a recibirlos, tal como esta Sala y las distintas de esta Corporación lo han venido decidiendo en casos semejantes al presente. Sobre este asunto, y en especial sobre los gastos de administración, es del caso evocar lo que sostiene la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema en la sentencia SL1421-2019, Rad. 56174:

“Conforme a lo establecido en sede de casación, fuerza concluir entonces, que debe declararse la ineficacia de la afiliación de la demandante al sistema pensional de ahorro individual, debiendo retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban, es decir, como si ello no hubiera ocurrido, lo cual trae como consecuencia, que la actora jamás perdió el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/93, y de igual forma, que el Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. deba devolver los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, como en oportunidades anteriores lo ha dispuesto la Sala, pudiéndose traer a colación las sentencias CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 ...”.

Y de manera más precisa, en cuanto a todos los conceptos antes anotados, esta misma Corporación en sentencia del pasado 29 de julio (SL 2877 2020, Rad. 78667), expresó:

“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

En cuanto a las excepciones propuestas por las entidades demandadas, se tiene que no prosperarán: unas por no envolver hechos extintivos o modificativos de los derechos reconocidos, entre ellas las de inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar y buena fe; y otras, como la de prescripción, por estar comprometido un derecho pensional. En la sentencia inicialmente citada, se anotó:

“Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esa vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ

SL795-2013 ya la Corte había adoctrinado que «el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con la afiliación, las cotizaciones, el ingreso base de cotización y todos aquellos componentes de la pensión».

Hay que mencionar que así como la declaración de ineficacia es imprescriptible, los derechos que nacen de ello también tienen igual connotación. En efecto, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es un derecho subjetivo de orden irrenunciable, premisa que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular (inalienable e indisponible), como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable). En este sentido, la jurisprudencia del trabajo ha sostenido que el derecho a la pensión o a obtener su valor real, puede ser justiciado en todo tiempo (CSJ SL8544-2016).

Y semejantes razones proceden igualmente frente a la excepción que se denominó prescripción de la acción de nulidad, ya que de manera indirecta una declaración de ineficacia compromete un derecho pensional.

En conclusión, el fallo de primer grado se habrá de revocar en su integridad, para en su lugar disponer no solo la ineficacia solicitada, sino la declaración que a la demandante debe tenerse como que siempre ha estado vinculada al régimen de prima media con prestación definida, y que como consecuencia, PROTECCIÓN S.A. debe devolver a COLPENSIONES, no solo la cuenta de ahorro individual, con sus rendimientos, sino que tal proceder debe incluir todos los descuentos que se han hecho en materia de gastos de administración, Fondo de Garantía de Pensión Mínima, seguros previsionales y demás conceptos. El anterior reintegro, se deberá hacer en un plazo no mayor a los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión (art. 16 del Decreto 602 de 1994).

No existiendo otros puntos que resolver, las costas de las instancias estarán a cargo de Protección S.A., y a favor de la demandante. Como agencias en derecho en ésta se fija la suma de un SMLMV.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas y, en su lugar, FALLA:

1. DECLARAR la INEFICACIA del acto por el cual se produjo el traslado de la señora GLORIA ESTELLA URIBE ZAPATA, identificada con la C.C. 43.067.544, del ISS hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a la AFP PROTECCIÓN S.A., lo que se traduce en que se debe tener a ésta como si siempre hubiere estado afiliada al Régimen de Prima Media hoy administrado por COLPENSIONES

2. ORDENAR a la AFP PROTECCIÓN S.A., trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, dentro del término de 30 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, todos los dineros existentes en la cuenta de ahorro pensional, incluyendo sus rendimientos, así como las cuotas de administración, Fondo de Garantía de Pensión Mínima, seguros previsionales y demás conceptos que haya descontado en un pasado.


3. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, reactivar la afiliación de GLORIA ESTELLA URIBE ZAPATA, sin solución de continuidad, y una vez recibidos los recursos provenientes de la AFP PROTECCIÓN S.A. procederá a validar su equivalencia en semanas de cotización, para efecto de atender las prestaciones a que haya lugar, previo cumplimiento de los requisitos legales.

4. DECLARASE no probadas las excepciones propuestas, por las razones que da cuenta la parte motiva de esta providencia.

5. Costas de las instancias a cargo de la AFP PROTECCIÓN S.A. Como agencias en derecho en ésta se fija la suma de un SMLMV a favor de la demandante.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
ACLARACIÓN DE VOTO



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 92 fijados el 28 de mayo de 2021
en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.